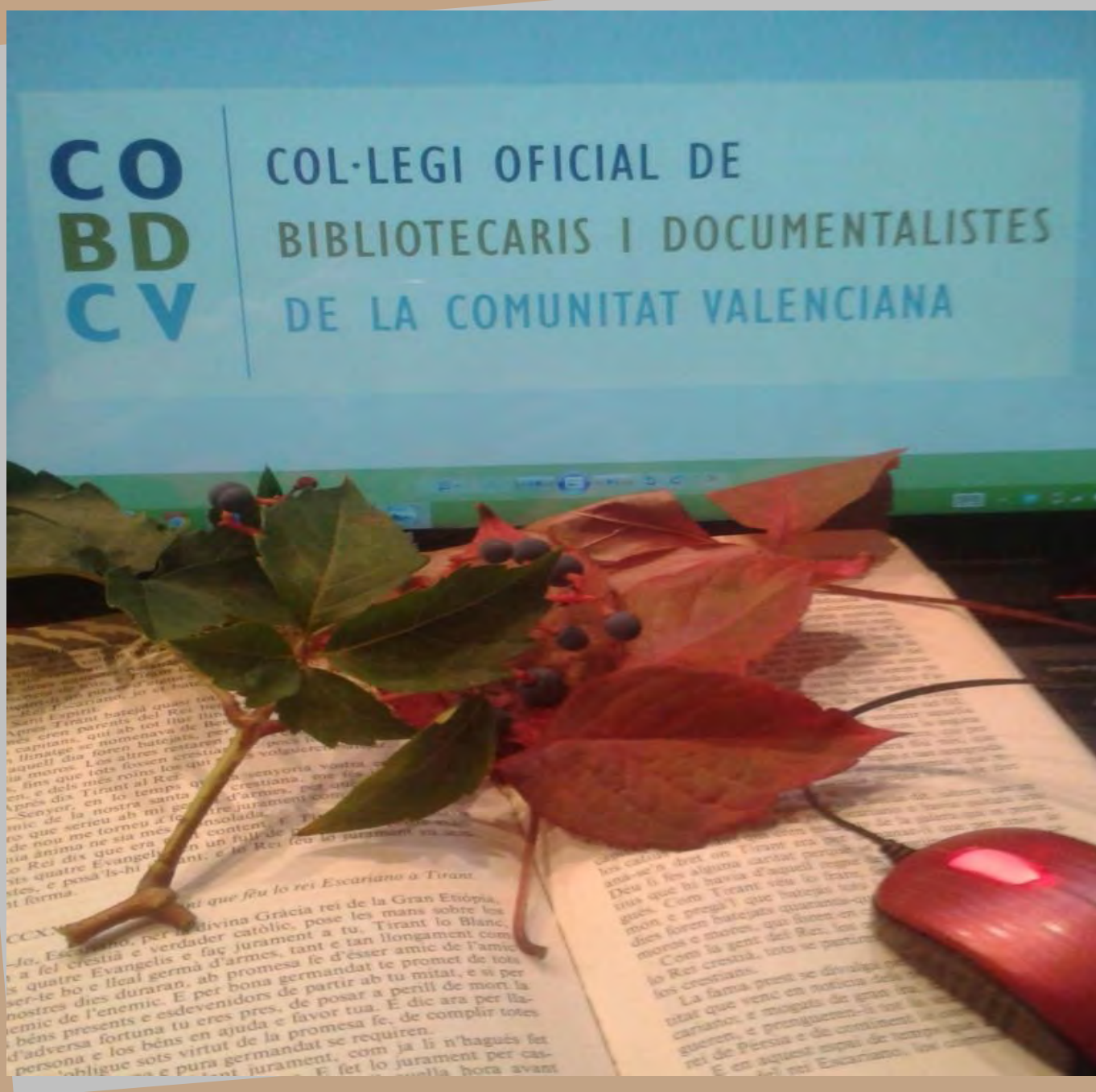


SÍMILE

TARDOR 2014. SETEMBRE-OCTUBRE-NOVEMBRE



n.º 26

ISSN 2171-6293

CO
BD
CV

COL·LEGI OFICIAL DE
BIBLIOTECARIS I DOCUMENTALISTES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

DESTACATS

Y ahora, ¿qué va a pasar?

Gallo León, José Pablop. 4-9

Entrevista a Glòria Pérez Salmerón, presidenta FESABID

Grup de treball SÍMILE.....p. 10-13

Anuario ThinkEpi 2014

Monrós Lliso, Eduardp. 14-18

INFORMA

Altres activitats del col·legi setembre, octubre i novembre de 2014

Grup de treball SÍMILE.....p. 20-21

El Col·legi de documentalistes fa al·legacions a la llei de transparència de la Generalitat i es reuneix amb els partits polítics

Grup de treball SÍMILE.....p. 22-23

EXPERIÈNCIES

Estudio de las ofertas de empleo para titulados en Información y Documentación como posible vía para detectar necesidades de formación

Soler, Monreal Concha.....p. 24-29

DE LITERATURA, D'ALTRES ARTS I DE BIBLIOTEQUES

Divagacions sobre el silenci

Guillem Alapont, Ramón.....p. 30-32

LECTURES

Llibre: La Intranet Social

Giménez Chornet, Vicent.....p. 34-35

Llibre: Innovación en bibliotecas

Giménez Chornet, Vicent.....p. 36-37



SIMILE, Butlletí del COBDCV, Número 26 2014

ISSN: 2171-6293

Edició:

Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica. Universitat Politècnica València (UPV)

Camí de Vera s/n

València, 46002

Tfo. +34 620707369

Dirigeix i coordina :

Vocalia de Comunicació i Publicacions COBDCV

Lola Alfonso Noguerón. [Documentació RTVV](#)

Comité de redacció i maquetació :

Mar Buigues García. Documentalista COBDCV

M^a Dolores Martínez Santiago

Miriam Calvillo Mora. Documentalista - Gestión de Contenidos

Traductora-correctora de valencià

Antonia Tárraga Giménez

<http://issuu.com/cobdcv-valencia> <http://www.cobdcv.es/>

Y ahora, ¿qué va a pasar?



José Pablo Gallo León

Bibliotecario Universidad de Alicante

El día de la aprobación del esperado, que no deseado, Real Decreto regulador de la remuneración por préstamo ha llegado al fin, iniciando un debate en círculos bibliotecarios y, mucho menos, culturales. La lectura de su texto y de algunas magníficas reflexiones, como las de Merlo Vega, Julián Marquina o Manuel Gil¹, suscita más dudas que certezas, aún a pesar de que esta legislación debería haber cerrado el tema. Las dudas se expresan por quien esto escribe desde una situación supuestamente cómoda, trabajando en una biblioteca universitaria que no se ve afectada. Pero como antiguo gestor en públicas, como bibliotecario y como ciudadano sí resulto persona interesada y preocupada.

Ante todo, tres premisas:

- Los autores tienen derecho a la protección de su propiedad intelectual y a una remuneración por su trabajo.
- La mayoría de los bibliotecarios somos funcionarios, y como tales tenemos la obligación no sólo de aplicar esta legislación, sino de velar por su cumplimiento.
- Era necesario realizar una normativa que traspusiese o aplicase la tristemente famosa Directiva 2006/115/CE

Ahora bien, esto no implica que esta normativa nos parezca adecuada, ni siquiera justa, aunque esto sea un concepto subjetivo. Por eso mismo, y desde nuestra posición de servidores públicos podemos objetar, discutir e intentar cambiarla para que se adecue a una realidad en la que encaja mal.

Gil, Manuel. "Cui prodest: contra el canon de préstamo en bibliotecas" @*ntinomias libro* [Blog]. Disponible en: <http://antinomiaslibro.wordpress.com/2014/09/01/cui-prodest-contra-el-canon-de-prestamo-en-bibliotecas/>

Marquina, Julián. "Y el día llegó... el día en que las bibliotecas pagarán por el préstamo". *Julian marquina* [Blog]. [Publicado el] 1 agosto, 2014 AT 11:17 Disponible en: <http://www.julianmarquina.es/y-el-dia-llego-el-dia-en-que-las-bibliotecas-pagaran-por-el-prestamo/>

Marquina, Julián. "Mi reclamación de derechos de autor por préstamo = 0 euros". *Julian Marquina* [Blog]. [Publicado el] 4 septiembre, 2014 AT 12:58. Disponible en: http://www.julianmarquina.es/mi-reclamacion-de-derechos-de-autor-por-prestamo-0-euros/?utm_source=HS

Merlo vega, José Antonio. "La sinrazón del canon por préstamo bibliotecario". *Biblioglog* [Blog]. Publicado en 3 septiembre 2014. Disponible en: <http://biblioblog.org/2014/09/03/la-sinrazon-del-canon-por-prestamo-bibliotecario/>

Una norma contradictoria en sí misma

Como ya han indicado, entre otros, los autores arriba mencionados, el Decreto se basa en una idea errónea: que el préstamo bibliotecario perjudica a los autores. Esto es una idea desgraciadamente compartida por muchos de esos autores, independientemente de su ideología y éxito de ventas. Sin embargo, esta norma más bien les puede perjudicar, incluso a corto plazo, al afectar a las bibliotecas públicas y sus presupuestos.

Los impulsores de la norma olvidan o ignoran que las bibliotecas, especialmente las públicas, son centros de difusión cultural y de promoción de la lectura. Como tales, ya hacen una labor impagable de cara a los autores y otros tenedores de derechos (más adelante reflexionaremos algo sobre las editoriales). Además, y como sabemos, son el refugio donde encontrar títulos y autores rápidamente descatalogados, en un momento en el que el mercado se constriñe cada vez más a las novedades, desapareciendo las librerías *de fondo*.

Por otra parte, esta remuneración prevista supone volver a pagar por unos derechos que ya pagamos con la compra de los documentos. Aunque no estemos hablando de una tasa ni impuesto, pues estas cantidades no serán recaudadas por la Administración ni tendrán un destino público, recuerda excesivamente a una doble imposición.

El Real Decreto es en cierto sentido contradictorio con la propia norma de la que emana (Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas). En primer lugar, supone lastrar uno de los servicios considerados como básicos en la misma, como es el préstamo de la obras. Pero además resulta chocante que, como servicio público esencial, disponga del descuento máximo que permite la Ley para la adquisición de los libros (15%), y al mismo tiempo se imponga esta cuota. Si la biblioteca pública da un servicio reconocido universalmente como conveniente y se le beneficia por ello con un descuento para ayudar



Licencia CC: BY Grupo Durga. Imagen: UK Crown copyright expired. Dominio público.

a ampliar y dotar mejor ese servicio ¿cómo es que se le carga por otra vía? Parece pues que, si la biblioteca pública es un servicio universal y necesario para la sociedad, no es la mejor idea imponerle una cuota que puede limitarlo.

Continúan las exclusiones previstas en la Ley 10/2007: bibliotecas de centros educativos y públicas de poblaciones de menos de 5.000 habitantes, lo cual incluiría los bibliobuses. Lo segundo se entiende por dos vías: por la imposibilidad de pago de este tipo de entidades; y como vía de hacer más liviana la normativa, pues su existencia ni siquiera está prevista en la legislación de Régimen Local. De otra forma resultaría incoherente pensar que sea más necesario fomentar la lectura allí que en un municipio de 35.000 habitantes que sólo tenga una biblioteca pública. Estas exclusiones también chocan con el valor de la biblioteca pública como centro para la formación permanente de la población y el apoyo de su educación, amén de hacer de biblioteca escolar en muchos casos. Quedarían incluidas muchas bibliotecas especializadas y de investigación no vinculadas a centros docentes que, de hecho, suelen tener un préstamo casi testimonial.

Muy comentada ha sido la no del todo clara correspondencia entre las entidades de gestión y los autores. Esto es, resulta evidente la imposibilidad material del pago directo autor a autor, para lo que se cuenta con entidades de gestión como intermediarias pero, ¿qué ocurre con aquellos autores no asociados a ninguna entidad? La respuesta sencilla es que se realiza una media que ya descuenta estos casos, pero debería estar reflejado en el texto del Decreto.

Por otra parte, los derechos de las obras están normalmente cedidos de forma parcial a una editorial. Además, realizan ediciones de títulos que ya están en dominio público, generando nuevos derechos sobre estas ediciones. Buena parte de las editoriales están asociadas a CEDRO, con lo que se supone que recibirían una parte de las cantidades recaudadas, pero se verán perjudicadas por el probable descenso (otro más), que acarreará en las adquisiciones de las bibliotecas. Bien saben editores y libreros que la principal fuente de financiación de muchas ediciones ha sido y es su compra por bibliotecas. El apoyo que realizan las bibliotecas a la promoción de la lectura y la literatura en general, y también de obras en concreto, es bien conocida. Con todo esto incluso se echa de menos una mayor respuesta por las editoriales, salvo que aún e increíblemente algunos editores piensan que el préstamo de libros les supone menos ventas.

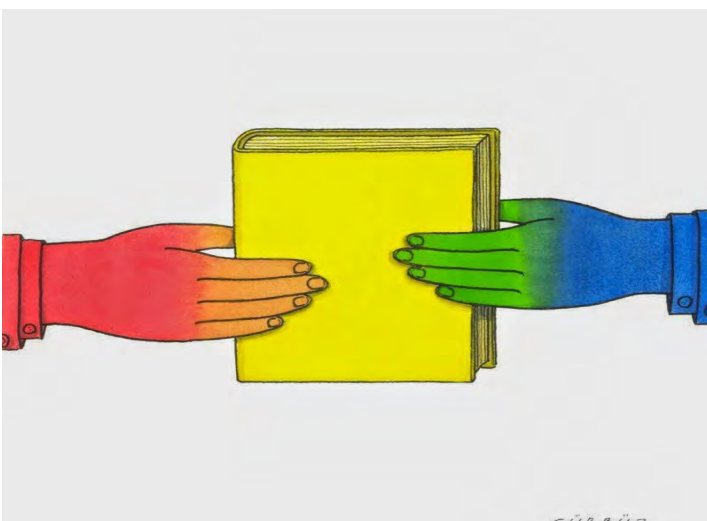
Y en esto, recordemos la obviedad: la imposición de este *canon* supondrá una nueva restricción presupuestaria para unas bibliotecas ya muy castigadas por la crisis. Debemos indicar que probablemente sobrecargue los capítulos que más afectan, los de gastos y transferencias

Corrientes. Es cierto que esto no atañe directamente a la parte dedicada a la compra de documentos, pero tocar ese aspecto de los presupuestos, que nunca creció generosamente, resulta dramático para cualquier centro y puede suscitar restricciones para asegurar una mínima supervivencia del presupuesto anual. Nos encontramos ante la paradoja de que, para no cargar más sus mermados presupuestos, las bibliotecas pueden intentar no incrementar su número de usuarios activos ni su colección, condenándose a su intrascendencia como servicio.

Difícil aplicación

A todo esto, y además de presupuestariamente, ¿cómo nos afectará? La propia noticia ha generado una reacción positiva (preocupación del usuario por el futuro de su servicio) y otra negativa, como es la asimilación al llamado *préstamo de pago*. Aunque existen realidades extranjeras de tasas por algunos tipos de préstamo, como audiovisuales, la posibilidad de tener que pagar por el préstamo ha producido un doble error entre los usuarios. Por un lado, les ha preocupado que el préstamo se convierta en una especie de videoclub o como se hacía antaño en algunas librerías y quioscos. El segundo error es pensar que, aunque este pago no sea directo, esto no les vaya a suponer un coste, pues el dinero procede de sus, nuestros, impuestos. Probablemente ambas reacciones se hayan visto diluidas por la fecha veraniega de publicación del Decreto.

Pero además, nos va a suponer una gran dificultad en la gestión. Ante la realidad de que la primitiva regulación prevista para la remuneración en la Ley 10/2007 nunca resultó efectiva, parece que se ha determinado cargar la gestión y el pago en cada biblioteca. Hasta ahora se había pagado únicamente, salvo contadas excepciones, lo correspondiente a las Bibliotecas Públicas del Estado por parte de la propia administración central.



No vamos a entrar aquí a explicar el procedimiento al detalle, pues sobradamente se ha repetido, pero implica enormes dificultades de gestión. En principio, se cobra por cada préstamo

y cada usuario que haya realizado al menos un préstamo, exceptuando las personas con discapacidad. Esto supone la exclusión implícita de la red de centros de la ONCE, pero, ¿cómo se calcula en una biblioteca común? Incluso produce dudas legales y ciertamente reparo moral que haya una casilla, ahora inexistente, en la ficha del usuario que distinga si tiene un grado X (¿cuál?) de discapacidad. Tampoco los sistemas de gestión bibliotecaria están preparados para diferenciar las obras sujetas a licencias *copyleft* o las que estén en dominio público.

El problema de gestión se agrava porque aún existen muchas bibliotecas con gestión manual del préstamo, y relativamente pocas usan el módulo de adquisiciones de su sistema informático. El cálculo en esas condiciones de la cantidad puede resultar sencillamente irrealizable. Más aún, si recordamos la escasez de personal que sufren las bibliotecas por lo general, resulta difícil pensar que puedan afrontar una tarea que supondrá muchas horas de trabajo. Claro que, si las entidades de gestión de derechos detraen a sus afiliados un porcentaje precisamente por esto, por los trámites y la gestión ¿podrían las bibliotecas cobrar a las mismas una cantidad por este arduo trabajo de cálculo, que se descontaría de la cantidad final? Todo esto nos lleva a creer que la solución transitoria del pago de 0,16 € por obra adquirida para préstamo se prolongará más allá del previsto 1 de enero de 2016.



<http://www.yoleomaeva.com/wp-content/uploads/2013/08/lector.jpg>

Se supone que el Decreto toma en consideración el libro electrónico. En ese caso, ¿qué hacemos si estamos comprando un paquete de títulos? Si se paga como un único ejemplar (se puede asimilar a una antología o colección), la cantidad de la remuneración sería ridícula. Yendo un poco más adelante, si la cuota es sobre cada préstamo, ¿cuándo se considera que se ha hecho un préstamo? Si hay una descarga con gestión electrónica de derechos (DRM) está claro, pero ¿y si es una descarga definitiva? ¿Y si sólo se ha descargado un capítulo? ¿Y si sólo se ha realizado una visualización en pantalla? ¿Entonces es consulta y no ha lugar al *canon*?

la institución titular del centro (normalmente ayuntamiento) tendrá que ponerse de acuerdo en el procedimiento. Parece complicado, mucho más si no se produce esta encomienda. No creemos que nadie vaya a lanzarse voluntaria y rápidamente a hablar con CEDRO para formalizar su pago. Por otra parte, las cantidades de las que podemos estar hablando hacen dudar de que una entidad de gestión pueda sacar rendimiento a la negociación individual con cada uno. La gestión delegada en mancomunidades está prevista, pero evidentemente es voluntaria. Esto se complica si la entidad de gestión de derechos se ve obligada a la reclamación por la vía judicial (no se contempla en principio la sanción administrativa), aunque ésta se haga contra un conjunto de ayuntamientos. Quizás la mención al Consejo de Cooperación Bibliotecaria como receptor y centralizador de los datos necesarios busque una vía o puerta trasera para conseguirlos; pero eso no implica que se puedan generar y, por tanto, remitir al CCB.

Por fin, se puede encontrar una última dificultad en la propia precariedad presupuestaria. Todos hemos conocido casos de grandes retrasos en los pagos a proveedores, incluso de amenazas de cortes de suministro eléctrico tras meses y años de impago. No es razonable creer que se vaya a pagar antes a las entidades de gestión que la luz.

Motivos para la esperanza

En resumen, es posible que la situación sea tan compleja que beneficie a las bibliotecas. Si estamos de acuerdo en la sinrazón de la propia existencia de este canon, creemos que esto conllevará su derogación con el tiempo. Además, un principio legal indica que, si resulta necesaria la repetición de la legislación sobre el mismo aspecto cada cierto tiempo, es porque la norma no ha sido efectiva. En este caso, si antes, con su aplicación directa desde la Ley 10/2007, no ha funcionado, resulta en principio dudoso que lo vaya a hacer ahora. Sobre todo ante las dificultades de gestión que hemos expresado. Mientras tanto, está en las manos de los bibliotecarios y de las asociaciones (como el propio COBDCV) ejercer presión, hacer *lobby*, para conseguir la final derogación o modificación de la Directiva Europea; pues es allí donde se debe incidir, en el origen del problema.